

Algunos aportes para pensar la paz a propósito de los diálogos

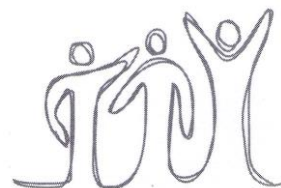
Cuando se anunciaron los diálogos del gobierno nacional con las FARC, todo indicaba que debíamos superar dos obstáculos básicos para lograr una participación protagónica de la sociedad civil: El hecho de que la negociación implicaba necesariamente la primacía de los actores armados a nivel mediático y político, y por otro lado, que persistía una gran timidez y poca audacia en la respuesta política de la sociedad civil al nuevo contexto, en parte debido a la sorpresa que significó el diálogo mismo para muchos sectores a favor de la paz, que los (nos) dejó con la agenda a medio hacer.

Esos elementos han seguido determinando en gran medida los cambios en el estado de la opinión y en el liderazgo social por la paz. No superar el protagonismo excesivo de los armados y no pasar a la ofensiva en materia política, son los grandes déficit del movimiento por la paz que ha querido nacer. Sin embargo, hay formas de salir del entuerto, y de hecho podemos afirmar que hubo amagos relevantes. Veamos.

El protagonismo social por la paz, que promovió la apertura del diálogo y tuvo su pico en abril con la Marcha por la Paz --promovida la Marcha Patriótica y la Alcaldía de Bogotá--, y el Congreso para la Paz --liderado por el Congreso de los Pueblos, el Comosoc y la Red de Iniciativas de Paz desde la Base--, actualmente se ha estancado. Pero eso no puede ocultar que en abril se perfiló un verdadero movimiento social por la paz, con presencia masiva en las calles, impacto sobre los medios, e incluso con efectos directos sobre la opinión pública, que se pasó mayoritariamente a estar por la paz y arrinconó a la extrema derecha guerrillerista; incluso ahora que la dinámica se ha estancado, esos elementos siguen influyendo sobre el momento de la paz.

Ya en el mes de mayo el clima de la opinión y del movimiento social organizado era hacia el pesimismo. Es evidente que el informe público sobre los preacuerdos en materia agraria se hizo para luchar contra ese escepticismo generalizado. La situación tiende a ser más precaria para el movimiento por la paz por el nuevo protagonismo de los partidos y actores políticos que se acentúa en cercanías de la campaña electoral del 2014, la cual se desenvolverá en clara referencia a las negociaciones de La Habana.

¿Qué creó este clima de escepticismo sobre el proceso, si abril parecía señalar otra cosa? En realidad el problema es menos de opinión y más de realidad. Por un momento -cuando se hicieron los anuncios y se armaron las parafernalias mediáticas de la paz- la negociación "ocultó" la guerra misma; pero ese efecto ilusión ha cesado con la continuidad de la confrontación y su aparente agudización (esa sí, una imagen mediática que se proyecta por realizarse en medio de la negociación); por otra parte, el gobierno y las FARC se creyeron el cuento del cambio en la opinión y se descuidaron, dando por hecho que el uribismo se iba a marginar, de modo que centraron su estrategia mediática en enviarse mensajes entre ellos, pero descuidaron a la sociedad, que exigía mensajes no solamente de prensa sino de realidades, especialmente la de reducir el impacto de la guerra sobre las comunidades locales. Adicionalmente: el gobierno y guerrilla se dieron a la tarea de abusar del doble lenguaje -diálogo y amenaza- que tarde o temprano conduce

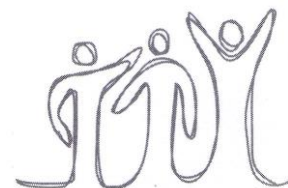


al escalamiento y al fastidio social; la electoralización de la solución del conflicto de forma excesiva (por Santos y las FARC), ha producido un hastío de sectores independientes que apoyan los diálogos pero no a Santos, los cuales al marcar distancia de Santos también lo hacen frente a la negociación; y las FARC con sus mensajes erráticos a favor del alargue del período presidencial de Santos han aceptado el lenguaje de unir el tema electoral con la negociación. Esos elementos han producido una distancia política de la sociedad con dos actores que quieren hacer política sin contar con la sociedad misma.

A lo que debemos agregar que sectores políticos protagónicos en los diálogos abandonaron la línea de apertura que inicialmente se dio en la Ruta Social Común para la Paz, y decidieron ubicarse en un “corporativismo de la paz” o, lo que es lo mismo, en el aprovechamiento partidario de la paz, que expulsa de los espacios amplios a muchos sectores que no quieren verse involucrados en condiciones de subordinación con las fuerzas políticas afines a los actores de la negociación; por cierto, este corporativismo viene a reforzar la idea en algunos sectores de que los acuerdos ya están arreglados, lo que los hace desinteresar aún más.

Pero sin duda el detonante del escepticismo es la guerra misma. En las regiones la continuidad de la guerra ha generado un repliegue de las organizaciones más activas a favor de la paz. Organizaciones indígenas, afros y campesinas, con razones de peso esperaban una reducción de la intensidad del conflicto y vieron con simpatía el cese unilateral del fuego de principios del 2012, e iniciaron acciones sistemáticas para acompañar el proceso; pero la continuidad no solo de los enfrentamientos militares, sino de las agresiones por parte de los grupos armados a las comunidades mismas, hizo que las protagonistas centrales de la lucha por la paz se replegaron de nuevo en una política de exigencia de respeto a los derechos de las comunidades, más que en una política extensiva por la terminación de la guerra. El repliegue de estas organizaciones –como las indígenas del Cauca- se combina con un proceso inverso: las organizaciones de base más locales han iniciado un proceso de “aprestamiento” para la paz y empiezan a crear dinámicas comunitarias para sumarse al proceso. El deber de las organizaciones más fuertes en este enfoque es sobreponerse al razonable escepticismo y servir de catalizadoras a la ola de procesos locales por la paz que se perfilan.

¿Y el anuncio de los acuerdos iniciales sobre el tema agrario? La idea del anuncio era promover una actitud positiva de la sociedad frente a la negociación; podríamos compartir que ese propósito de reconstruir cierto optimismo se logró por unas semanas en algún sector de la galería; pero es evidente que el escepticismo en las organizaciones sociales más dinámicas no tuvo modificación. En gran medida porque la manera como las FARC han presentado los avances, por ejemplo sobre las ZRC, es corporativa y sobreideologizada; en la mesa de La Habana las Zonas de Reserva aparecen claramente ligadas al interés legítimo de comunidades donde tienen presencia las FARC y que pueden verse como su base social, pero no logran proyectarse como medio para transitar hacia otro modelo rural con beneficio para toda la sociedad. Si este mensaje involuntario no se reversa, es poco probable que las organizaciones agrarias que no están en esas zonas o tienen diferencias con la figura jurídica se sientan debidamente involucradas.

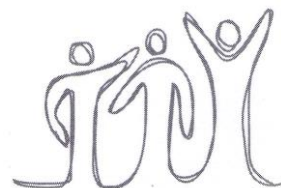


También con la posible conformación del Fondo Nacional de Tierras hubo una fría recepción en las organizaciones campesinas y agrarias. En buena medida porque la figura es tibia -casi fría- para emprender los necesarios procesos de reforma agraria que requiere el país, teniendo en cuenta que todos los predios que irán a dicho fondo afectan de modo más bien marginal al latifundio. O mejor: la figura del fondo no parece tener en cuenta que la restitución de predios expropiados después de 1991 no alterará la estructura de propiedad de la tierra que ha propiciado el conflicto y que es el verdadero obstáculo a una reforma rural importante; tampoco tiene en cuenta que la extinción de dominio a la fecha ha sido un mecanismo muy poco efectivo y muy lento para atacar al latifundio armado. Y si las dos herramientas que pueden afectar ese latifundio en zonas productivas -valles interandinos y llanura atlántica- son tan débiles, queda claro que el Fondo se alimentará de los baldíos y las zonas de colonización. En suma, la reforma agraria sigue en veremos. Hay que decir, no obstante, que estos resultados corresponden con una correlación de fuerzas determinada, y no es precisamente el mejor momento de la lucha armado o de la lucha popular el que estamos viviendo; en otras palabras, es injusto culpar a la Mesa de La Habana (vale decir, a la negociación) de que el latifundio no se vaya a afectar como debería.

Para sectores más ligados con el análisis de la economía nacional sigue siendo una incógnita -o quizá no tanto- el alcance del esquema de endeudamiento público para financiar la paz. Los pronunciamientos del parlamentario Juan Mario Laserna sobre la necesidad de trasladar a la sociedad -vía impuestos- el costo de la deuda de la paz, así como sus ideas de que la comunidad gestiona los nuevos emprendimientos económicos como garantía para pagar dicha deuda o que se puede integrar a los movimientos de resistencia territorial por vía del crédito territorial, evidencian que para el gobierno “hacer Estado” a nombre de la paz se traduce en que la deuda es válida en nombre de la paz.

Escenarios abiertos

Pero la desinflada no indica que el camino del movimiento por la paz se haya cerrado. Por el contrario, obliga a que las grandes plataformas de articulación de organizaciones populares den un salto de calidad a sus acciones. El Congreso para la Paz definió la realización de los Diálogos Sociales por la Paz, que incluyen diálogo con insurgencia, acuerdo sobre reglas de juego con las oligarquías locales, superación de conflictos inter o intra comunitarios, preparación de acuerdos para el retorno de ex combatiente, etc. Si esto logra despegar, como se definió recientemente en su encuentro de Comisión Política, antes de finalizar 2013 podríamos tener nuevamente una dinámica creciente, incluyente y convocante. Un primer paso podría ser el Campamento Humanitario en el Cauca que fue aprobado en primera instancia por el Congreso de los Pueblos y la ACIN, y que está en consulta con los actores que estarán involucrados. Dicho campamento pretende la realización de Pactos por la Paz entre las organizaciones sociales y los gremios empresariales, diálogos políticos con la insurgencia y el Estado, crear un cordón humanitario de seguridad con la guardia indígena que sirva para exigir un cese bilateral de fuego. Acciones como ésta podrán devolver en parte el optimismo a la sociedad civil.



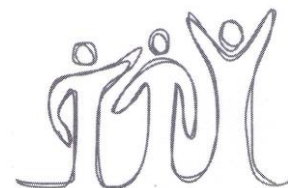
Por otra parte es posible darle continuidad a la Marcha del 9 de abril y hacer que las constituyentes por la paz que impulsa la Marcha Patriótica se conviertan en foco de nuevas grandes movilizaciones sociales que vayan más allá de sus enfoques ideológicos, a las cuales las otras plataformas y procesos ya han manifestado su adhesión anticipada. Para ello, obviamente, deben superarse las distancias políticas entre algunas organizaciones sociales, desentramar la vinculación tímida de la iglesia católica a los espacios por la paz, darle un impacto regional a los Foros temáticos organizados por el PNUD y la Universidad Nacional, articularse a los espacios impulsados por el Congreso de la República, entre otras acciones. Si ganamos en bajar el corporativismo y reconstruir el espíritu de amplitud, de seguro lo que vimos en abril podrá marcar el escenario del 2014.

Y servirá para recomponer el movimiento por la paz, la realización de varias acciones puntuales ya programadas. Las acciones por la tierra en octubre, donde convergerá el movimiento indígena campesino; la movilización de Mujeres por la Paz en noviembre, el diálogos entre las organizaciones indígenas y las FARC de pronta realización, la Semana por la Paz, sin duda aportarán a ese propósito. A lo cual bien podrían sumarse otros espacios como las mesas de consulta de la Ley Rural.

Tensiones por resolver

De todos modos no hay que perder de vista que el problema de fondo sigue sin resolverse: ¿Hay disposición de un cambio en la estructura de poder? Por los hechos recientes en el Catatumbo, por la continuidad de una política de señalamientos al movimiento popular ejercida desde los ministerios, es claro que el establecimiento no abandona su idea excluyente y autoritaria, y que la “solución criminal” frente a la organización popular sigue orientando a muchos militares, paramilitares, seudomilitares y empresarios afines. Cuando se dieron los debates sobre participación política, organizados por el PNUD y la UN, los únicos que salieron a rebatir lo allí discutido fueron los uribistas y la derecha fascista, pero es dudoso que solo ellos tengan oposiciones a la democracia. El silencio del establecimiento empresarial frente a ideas como ampliar la democracia, reformar la fuerza pública, reconocer el derecho de las comunidades a decidir, etc., muestran que muchos de ellos no quieren comprometerse en ir más allá de la caricatura de democracia existente, y prefieren “esperar a ver qué pasa”. Curiosamente resulta más audaz Sergio Jaramillo hablando de “transición” democrática, que los grupos empresariales; en el fondo estos últimos quieren tener hasta el final la carta de renovar la alianza con el paramilitarismo, por si lo de La Habana no resulta tan atractivo en términos de costo-beneficio.

Las otras tensiones las tenemos dentro del movimiento por la paz. Para ello es necesario: que los temas de participación política y garantías democráticas no pretendan ser acumulados partidariamente sino que insistan en desatar todas las fuerzas sociales represadas por el régimen político; que los derechos de las víctimas no sea utilizado indebidamente para que se impongan tesis excluyentes que ven imposible toda solución diferente a la punitiva y carcelaria o que en la práctica insisten en una salida de impunidad total; que las organizaciones guerrilleras miren el movimiento popular más allá de sus posibles o supuestas bases sociales, que entiendan su



diversidad y amplitud, y que reconozcan en los hechos que las dinámicas populares desde hace décadas han optado por soluciones organizativas de autonomía territorial, política horizontal y creatividad ideológica; y, por supuesto, que las diferencias sobre el tema de la tierra se resuelva por una posición unitaria, que no es imposible de consensuar.

Pero la guerra sigue. Y sobre todo, sigue conspirando contra la participación de la sociedad civil en el proceso de paz. Por eso tiene vigencia la tesis indígena de atravesarnos a la guerra. Nunca como ahora es necesario organizar acciones radicales de paz que nos permitan imponer el cese al fuego bilateral, o por lo menos el cese de los hostigamientos y hostilidades.

